Determinantes del aumento de insolvencias de personas naturales en Colombia: un análisis macroeconómico, regional y comparativo

Diana Katherine García Martínez

Artículo presentado para optar al título de Contador Público

Universidad de Antioquia

Facultad de Ciencias Económicas

Contaduría Pública

Medellín, Antioquia, Colombia

2025

Cita	(García Martínez, 2025)
Referencia **Estilo APA 7 (2020)**	García Martínes, D. K. (2025). Determinantes del aumento de insolvencias de personas naturales en Colombia: un análisis macroeconómico, regional y comparativo [Trabajo de grado profesional. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.]

creative commons BY NC SA

Centro de Documentación Economía

Repositorio Institucional: http://bibliotecadigital.udea.edu.co

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Determinantes del aumento de insolvencias de personas naturales en Colombia: un análisis macroeconómico, regional y comparativo

Resumen

Entre 2019 y 2024, Colombia registró un crecimiento sostenido en las solicitudes de insolvencia de personas naturales no comerciantes (PNNC). Este artículo analiza los determinantes macroeconómicos (inflación, tasas de interés, costo del crédito), microeconómicos (fragilidad financiera, DSR) e institucionales (diseño y difusión del régimen), integrando evidencia regional y comparativa internacional. Se utilizan estadísticas oficiales, tablas e insumos de encuestas (existentes y simuladas), además de simulaciones de choque sobre la ratio de servicio de deuda (DSR). Los hallazgos sugieren que el aumento de insolvencias responde a la confluencia de un entorno de costos financieros elevados con vulnerabilidades de ingresos y un mayor acceso al mecanismo. Se discuten implicaciones de política para prevención, protección al consumidor y educación financiera.

Palabras clave

Insolvencia personal

Sobreendeudamiento

DSR

Educación financiera

Tasas de interés

Colombia

Introducción

La dinámica de insolvencias personales en Colombia se ha convertido en un tema que ya no se puede ignorar. En los últimos años, especialmente después de la pandemia, muchos hogares han visto cómo su estabilidad financiera se ve amenazada por una combinación de factores: aumentos de precios, ajustes en las tasas de interés y la recomposición del crédito. Pero más allá de los números y estadísticas, detrás de cada insolvencia hay personas reales enfrentando decisiones difíciles. María, por ejemplo, trabaja como vendedora independiente y, aunque sus ingresos varían mes a mes, decidió comprar un electrodoméstico a crédito pensando que podría pagarlo sin problemas. Sin embargo, un aumento en la tasa de interés y la subida de los precios del transporte y la comida hicieron que pagar la cuota fuera un verdadero reto. Situaciones como la de María reflejan cómo las decisiones financieras cotidianas se entrelazan con fenómenos macroeconómicos y afectan directamente la vida de los hogares.

Este artículo se pregunta: ¿Determinar el aumento de las insolvencias de personas naturales entre 2019 y 2024? Para responderlo, se propone un enfoque mixto que vincula tres planos de análisis. El primero es el macroeconómico, que analiza cómo los choques de inflación y los ajustes de tasas de interés impactan en el costo del crédito y en la capacidad de pago de los hogares. El segundo es el microeconómico, utilizando el Debt Service Ratio (DSR) como indicador de la proporción del ingreso que se destina al servicio de la deuda, y evaluando su sensibilidad frente a diferentes choques. Por último, el plano institucional considera la evolución normativa del régimen de insolvencia para PNNC y su difusión territorial, es decir, si las personas tienen conocimiento del programa y acceso efectivo a sus beneficios.

El DSR, aunque central, no cuenta toda la historia. Por ejemplo, Juan, un conductor de plataforma, puede destinar un 35 % de su ingreso al pago de deudas y sentirse relativamente seguro si tiene algún ahorro o apoyo familiar; pero Ana, que trabaja de manera informal vendiendo productos de catálogo, podría estar al borde de la crisis con el mismo porcentaje, porque no tiene colchón financiero y sus ingresos fluctúan constantemente. Esto muestra que medir la carga de deuda no basta: también es crucial considerar la educación financiera, el acceso al crédito formal e informal y la estructura de ingresos de cada hogar.

La educación financiera emerge como un factor determinante. La literatura internacional y latinoamericana evidencia que quienes tienen mayor conocimiento financiero tienden a tomar decisiones más responsables, evitando caer en créditos de alto costo o en el hábito de pagar solo el mínimo de tarjetas de crédito. En Colombia, la informalidad laboral y la alta volatilidad de ingresos convierten a la deuda en un “colchón” que, cuando ocurre un choque económico, se transforma en un peso difícil de sostener. Además, el crédito informal sigue siendo común: préstamos “gota a gota” o de vecinos se usan por rapidez y facilidad, aunque sus tasas sean abusivas. Esto demuestra que la educación financiera debe ir más allá de conceptos teóricos, incorporando ejemplos prácticos adaptados a la realidad de cada región.

El Programa Nacional de Normalización de Crédito (PNNC) es un instrumento institucional pensado para aliviar la carga de los hogares más endeudados. Sin embargo, su efectividad depende de factores como conocimiento, confianza y accesibilidad regional. Por ejemplo, en Bogotá y Antioquia muchas personas saben del programa y podrían usarlo, mientras que en zonas del Caribe o Valle del Cauca la difusión es menor y, por ende, la utilización también. Esto subraya la importancia de políticas públicas que no solo ofrezcan mecanismos legales, sino que también promuevan educación financiera, acompañamiento y acceso efectivo.

La experiencia internacional aporta lecciones valiosas. En países como Chile, México y Estados Unidos, los procesos de bancarrota personal permiten que individuos reorganicen sus deudas, pero también muestran el impacto social y psicológico: estrés, ansiedad y efectos en relaciones familiares y laborales. Por eso, los programas de apoyo financiero y asesoría psicológica son tan importantes como la normativa misma. Las historias de hogares colombianos reflejan situaciones similares: familias que deben decidir entre pagar la cuota del carro o comprar comida, jóvenes que se endeudan para estudiar y se enfrentan a intereses que duplican el valor original del crédito, o trabajadores informales que recurren a préstamos rápidos y se ven atrapados en un ciclo de deuda.

El aporte de este artículo radica en integrar evidencia regional, compararla con literatura internacional y ofrecer simulaciones transparentes que muestran cómo distintos escenarios económicos afectan el DSR y la vulnerabilidad financiera de los hogares. Al incluir ejemplos cotidianos, el lector puede visualizar cómo la macroeconomía se traduce en decisiones concretas y cómo la política pública puede marcar la diferencia entre que un hogar enfrente la crisis con resiliencia o quede atrapado en la deuda.

La estructura del artículo guía al lector de lo general a lo particular: la Sección 1 presenta el marco teórico y evidencia comparativa; la Sección 2 describe la metodología y las fuentes de información, incluyendo encuestas simuladas y registros oficiales; la Sección 3 reporta los resultados a nivel nacional y regional con gráficos y tablas en color; la Sección 4 discute implicaciones y limitaciones; y la Sección 5 ofrece conclusiones y recomendaciones. Los anexos incluyen el detalle metodológico y el cuestionario de encuesta, asegurando transparencia.

En síntesis, comprender el sobreendeudamiento en Colombia requiere un enfoque integral que combine economía, comportamiento financiero e institucionalidad, reconociendo que detrás de cada cifra y cada indicador hay familias, historias, decisiones y esfuerzos por mantener la estabilidad del hogar frente a un entorno económico incierto. Este artículo busca dar voz a esos datos, mostrando cómo las políticas públicas, la educación financiera y el acceso a herramientas legales pueden contribuir a que los hogares colombianos enfrenten los desafíos económicos con mayor seguridad y resiliencia.

1. Marco teórico y revisión de la literatura

1.1. Conceptos y medición del sobreendeudamiento

El sobreendeudamiento se entiende como una situación persistente en la que el servicio de la deuda absorbe una fracción crítica del ingreso disponible, afectando el consumo básico y la estabilidad financiera del hogar. El indicador más utilizado es el Debt Service Ratio (DSR), calculado como la razón entre pagos mensuales de deuda e ingreso disponible. Numerosos estudios asocian umbrales de 30–40 % con mayor probabilidad de mora o insolvencia (Dynan et al., 2012; Jappelli et al., 2008; Keese, 2009). En Colombia, la figura de insolvencia para personas naturales no comerciantes (PNNC) está contemplada en el Código General del Proceso (Ley 1564/2012), complementada por lineamientos del Ministerio de Justicia.

La problemática sobre el sobreendeudamiento no es de hoy. En Europa, ya se evidenciaba desde la década de 1980 crisis de deuda de los hogares, en países como Francia, Alemania y Reino Unido, se crearon mecanismos legales que dieran tranquilidad a para personas no comerciantes, para brindar una segunda oportunidad (Anderloni & Vandone, 2011). En Estados Unidos, el régimen de quiebra del individuo regulado en el *Bankruptcy Code* bajo los capítulos 7 y 13, ha sido materia de estudio por la implicación en el consumo y en la estabilidad macroeconómica. Dice White (2007), *"la reforma de la bancarrota está íntimamente ligada a la dinámica del crédito al consumo y a la expansión del uso de tarjetas de crédito"* (p. 176). La historia muestra que medir el sobreendeudamiento y la generación de mecanismos institucionales de mitigación, son respuestas a los ciclos de crédito y crisis financieras.

En América Latina sin duda alguna al tratarse del tercer mundo, la preocupación por el sobreendeudamiento de los hogares se dio con más fuerza que en Europa y Estados Unidos, sobre todo tras las crisis financieras de finales de los años noventa y el crecimiento de los créditos de la década de 2000. Algunos países como Chile y Brasil vivieron esto rápidamente, lo cual desencadenó en una carga financiera alta y en el necesitar reformas regulatorias dirigidas a proteger al consumidor y facilitar reestructuraciones (Sanhueza & Tagle, 2016; García et al., 2019). En este sentido, la CEPAL advierte que *"el sobreendeudamiento de los hogares no es únicamente un problema financiero, sino también un factor de exclusión social"* (García et al., 2019, p. 88).

En Colombia, hablar del concepto de sobreendeudamiento de manera seria fue un poco más tarde, pues se comenzó a debatir académica y políticamente a partir de la expedición de la Ley 1564 de 2012. Esta norma permitió que personas naturales no comerciantes se pudieran acoger a un procedimiento de insolvencia con el fin de dar un respiro poder reorganizar sus deudas para así alcanzar acuerdos de pago al alcance del individuo, porque si bien es cierto antes se contaba con alternativas, pero estas eran muy limitadas y eran acuerdos privados con los acreedores que traían muy pocos beneficios a los deudores. Al comienzo del nuevo régimen se abrió paso a una vía institucional que favorecía también al deudor y aunque no se tuvo una buena difusión, con el tiempo se ha registrado un

crecimiento significativo en el conocimiento de esta por parte de la población (Universidad Externado, 2022; Rentería et al., 2023).

El DSR, que es la medición del sobreendeudamiento tiene atributos positivos y limitaciones. La ventaja más importante que tiene es la facilidad con la que se establece con claridad la proporción del ingreso que se destina al servicio de la deuda, lo cual permite hacer comparaciones regionales e internacionales. Aun así, este indicador se queda corto, ya que no mira otras cosas que también pesan mucho, como en qué se gasta realmente la plata, si la familia tiene algún ahorro disponible o si cuenta con el respaldo de la red de apoyo de parientes o conocidos. Cuando se habla de un contexto con tanta informalidad laboral como el colombiano, medir el ingreso disponible se vuelve un reto y termina dejando por fuera parte de la fragilidad que viven los hogares. Según Fedesarrollo (2022), *"la informalidad laboral dificulta la correcta medición del ingreso de los hogares y genera sesgos en la estimación de indicadores financieros como el DSR"* (p. 45).

Diversos informes recientes del Banco Mundial, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional advierten que, en los países en desarrollo, como Colombia, el crecimiento del endeudamiento de los hogares podría transformarse en un problema sistémico si no se refuerzan la educación financiera, los canales de resolución de deudas y la regulación del crédito (IMF, 2019; OECD, 2024). Así, el DSR se puede tomar como un indicador central, aunque conviene complementarlo con variables como la morosidad, la dependencia del crédito informal y la variación de los ingresos, si se quiere reflejar de manera más completa el problema del sobreendeudamiento en economías que comparten rasgos estructurales con Colombia.

1.2. Educación financiera y comportamiento del consumidor

Una vasta literatura muestra la asociación entre educación financiera y mejores decisiones de ahorro y endeudamiento (Lusardi & Mitchell, 2014). Disney y Gathergood (2013) documentan que individuos con menor literacidad tienden a usar crédito costoso y a incurrir en impagos con mayor frecuencia. En contextos de alta informalidad laboral —comunes en América Latina— la volatilidad del ingreso agrava la fragilidad ante choques de tasas o precios.

En Colombia esto se ve reflejado en la cotidianidad. Muchas familias toman decisiones financieras pensando únicamente en la cuota mensual y no en el costo total del crédito. Por ejemplo, es común comprar un televisor o un celular a 36 cuotas en una tienda de cadena, sin calcular que al final se pagará casi el doble. Según la Superintendencia Financiera de Colombia (2022), una gran parte de los usuarios de tarjetas de crédito solo cubren el pago mínimo, lo que genera intereses acumulados que alargan la deuda indefinidamente.

La alta informalidad laboral también incide de manera directa. Trabajadores independientes como conductores de plataformas, vendedoras de catálogo o personas que viven del rebusque tienen ingresos muy variables. Un mes pueden ganar bien y otro apenas lo justo para cubrir el arriendo. En estas circunstancias, la deuda funciona como una especie de "colchón" para sostener el consumo, pero cuando llega un aumento en la tasa de interés

o un imprevisto en los ingresos, ese mismo colchón se convierte en una carga difícil de manejar (Banco de la República, 2023).

Además, la cultura financiera en los hogares colombianos suele transmitirse de manera informal. Muchas veces se decide endeudarse porque un familiar o vecino lo hizo, sin analizar si las condiciones son las mismas. Es usual escuchar frases como *"a mi primo le sirvió la libranza, entonces yo también la saco"*, sin pensar que las deudas anteriores, el nivel de ingreso o incluso la estabilidad laboral no son iguales. En este sentido, la educación financiera debería ser práctica y cercana, usando ejemplos claros: mostrar cómo una deuda de un millón de pesos puede transformarse en dos millones si se pagan solo los mínimos, tiene más impacto que un taller lleno de tecnicismos (OECD, 2024).

Otro aspecto clave es el peso del crédito informal. En ciudades como Cali o Medellín, y en muchos pueblos apartados, los préstamos "gota a gota" siguen siendo comunes. Aunque la gente sabe que los intereses son altísimos y que hay riesgos de seguridad, se usan porque el dinero llega al instante y sin papeleos. Fortalecer la educación financiera no significa solo advertir del peligro, sino también mostrar rutas más seguras: desde las cooperativas locales hasta las nuevas fintechs que están ofreciendo microcréditos con tasas reguladas (Banco Mundial, 2022).

Finalmente, la educación financiera debe ser vista como una política pública, no como un esfuerzo aislado de cada persona. Programas como la Semana de la Educación Financiera son un paso en la dirección correcta, pero falta continuidad y, sobre todo, adaptar el mensaje a las distintas realidades del país. No es lo mismo explicarle un crédito a un estudiante universitario en Bogotá que a un campesino en el Cauca, donde la banca formal casi no llega. Esa cercanía y adaptación son claves para reducir el sobreendeudamiento y dar herramientas reales a la gente para que tome mejores decisiones.

1.3. Evidencia comparativa internacional y latinoamericana

En economías avanzadas, la literatura sobre bancarrota personal y distress financiero (Livshits et al., 2007; White, 2007) resalta la relevancia del ciclo económico y del diseño institucional del régimen de quiebra. En América Latina, estudios para Chile, México, Brasil, Argentina y Perú señalan patrones similares: períodos de alza en tasas reales y encarecimiento del crédito se asocian con mayores problemas de pago (García et al., 2019; Sanhueza & Tagle, 2016). Para Colombia, trabajos recientes reportan el incremento de los procesos de insolvencia en PNNC y discuten su efectividad como mecanismo de alivio ordenado (Rentería et al., 2023; Universidad Externado, 2022).

Además, se puede observar que los efectos de la bancarrota personal no son solamente económicos, sino también sociales y psicológicos. Cuando una persona entra en un proceso de insolvencia, no solo está reorganizando sus deudas, sino que también enfrenta un impacto emocional significativo, ya que la sensación de pérdida de control sobre la propia economía puede generar estrés, ansiedad e incluso afectar relaciones familiares y laborales (Gutiérrez & Pérez, 2020). Por eso, varios estudios recientes sugieren que los programas

de apoyo y asesoría financiera son tan importantes como los mecanismos legales mismos (Santos et al., 2021).

En el contexto colombiano, el aumento de los procesos de insolvencia en PNNC también refleja ciertas particularidades del mercado financiero local. Por ejemplo, el acceso al crédito en Colombia ha crecido en los últimos años, pero muchas personas lo utilizan sin una planificación adecuada, lo que aumenta la vulnerabilidad frente a cambios en las tasas de interés o en la inflación (Rentería et al., 2023). Este patrón no es exclusivo de Colombia, pues en países vecinos como Chile y México se ha visto que, durante períodos de crecimiento económico rápido, también aumenta el número de personas que buscan mecanismos de alivio financiero (Sanhueza & Tagle, 2016; García et al., 2019).

Otro aspecto relevante es la percepción de la población sobre estos procesos. En muchos casos, existe un estigma social asociado con la bancarrota personal, como si fuera un fracaso moral, cuando en realidad se trata de un fenómeno ligado a factores estructurales y coyunturales de la economía (White, 2007). Por esta razón, expertos recomiendan no solo fortalecer los mecanismos legales de quiebra, sino también promover campañas de educación financiera y de sensibilización que ayuden a desmitificar la bancarrota y a que los ciudadanos vean estos procesos como oportunidades de reorganización y recuperación económica (Livshits et al., 2007).

Finalmente, la evidencia sugiere que los procesos de insolvencia en PNNC son más efectivos cuando se combinan con políticas públicas que estabilicen la economía y apoyen a los más vulnerables. En este sentido, programas de subsidio temporal, flexibilización de pagos y acompañamiento legal y psicológico pueden mejorar los resultados y reducir la reincidencia en problemas financieros (Universidad Externado, 2022; Santos et al., 2021). Por tanto, abordar la bancarrota personal de manera integral implica entender tanto las dinámicas macroeconómicas como las experiencias individuales de quienes atraviesan estas situaciones, reconociendo que detrás de cada cifra hay personas con historias, esfuerzos y esperanzas de salir adelante.

2. Metodología

2.1. Fuentes de datos

Se emplean datos macroeconómicos agregados (inflación, tasa de política, usura), registros de procesos de insolvencia reportados por autoridades, y resultados de encuestas disponibles. Adicionalmente, se construye una encuesta simulada con 1.200 observaciones para caracterizar conocimiento del régimen, DSR y uso de crédito informal por región. Las tablas y gráficos resumen estadísticas para 2019–2024.

Estos datos permiten tener una visión integral tanto del comportamiento de la economía como del impacto sobre los hogares y las empresas. La información macroeconómica ayuda a entender cómo variables como la inflación o la tasa de política monetaria afectan la capacidad de pago de los ciudadanos. Por su parte, los registros de insolvencia aportan evidencia directa sobre la utilización de los mecanismos legales de alivio financiero, mientras que las encuestas permiten capturar aspectos que no se reflejan en cifras oficiales, como la percepción y conocimiento del régimen de insolvencia. La encuesta simulada con 1.200 observaciones se diseña para representar distintas regiones, lo que facilita un análisis comparativo y detecta diferencias en la fragilidad financiera y en el uso del crédito informal entre territorios. Esto ayuda a que las conclusiones sean más robustas y contextualizadas.

2.2. Operacionalización de variables

La principal variable de fragilidad es el DSR: DSR = (∑cuotas mensuales de deuda) / (ingreso mensual disponible). Se analizan umbrales de 35 % y 40 % como puntos de alerta. Para el costo del crédito se utiliza la tasa de usura de consumo como referencia. La variable de difusión institucional se aproxima con indicadores de uso del régimen y disponibilidad de operadores por región.

El DSR es una métrica clave porque permite identificar qué tan comprometido está un hogar frente a sus obligaciones financieras, ofreciendo una perspectiva directa de la vulnerabilidad económica de las familias. Analizar los umbrales de 35 % y 40 % ayuda a distinguir entre niveles de riesgo moderado y alto, y facilita la toma de decisiones tanto de política pública como de gestión individual de deuda. La tasa de usura se emplea como referencia para entender el costo efectivo del crédito y su impacto sobre la carga financiera. Finalmente, medir la difusión institucional con indicadores de uso del régimen y la disponibilidad de operadores permite evaluar cómo la estructura legal y la presencia de entidades especializadas pueden facilitar o limitar el acceso de los ciudadanos al alivio financiero. Esto también contribuye a detectar brechas regionales y posibles áreas de intervención.

2.3. Simulaciones de choque

Se implementan tres escenarios: (A) choque de inflación (+2 p.p.) que reduce el ingreso real; (B) choque de tasa de interés (+1 p.p.) que eleva la cuota; (C) combinación de ambos.

El impacto se estima multiplicativamente sobre el DSR base, con elasticidades conservadoras.

Estas simulaciones permiten anticipar cómo cambios inesperados en la economía pueden afectar la capacidad de pago de los hogares. El escenario de inflación representa un aumento en los precios que erosiona el ingreso real de los ciudadanos, mientras que el choque de tasa de interés refleja un incremento en el costo del crédito que encarece las cuotas mensuales. La combinación de ambos escenarios permite analizar situaciones más extremas y entender la resiliencia de los hogares frente a múltiples presiones económicas simultáneas. Utilizar elasticidades conservadoras asegura que las proyecciones sean prudentes y no sobreestimen el efecto de los choques, proporcionando un panorama realista y útil para la planificación de políticas públicas y la toma de decisiones financieras a nivel individual y regional.

3. Resultados

3.1. Contexto macroeconómico y financiero (2019–2024)

Tabla 1. Indicadores macroeconómicos y de carga financiera, Colombia (2019–2024).

Año	Inflación (%)	Tasa política (%)	Usura consumo (%)	PIB real (%)	DSR promedio (%)
2019	3.8	4.25	27.0	3.3	23
2020	2.5	1.75	26.5	-7.0	25
2021	5.6	2.0	26.9	10.7	27
2022	13.1	12.0	32.0	7.5	31
2023	9.3	13.25	43.0	1.2	34
2024	7.0	11.0	41.5	1.8	33

Nota. Valores aproximados con fines analíticos.

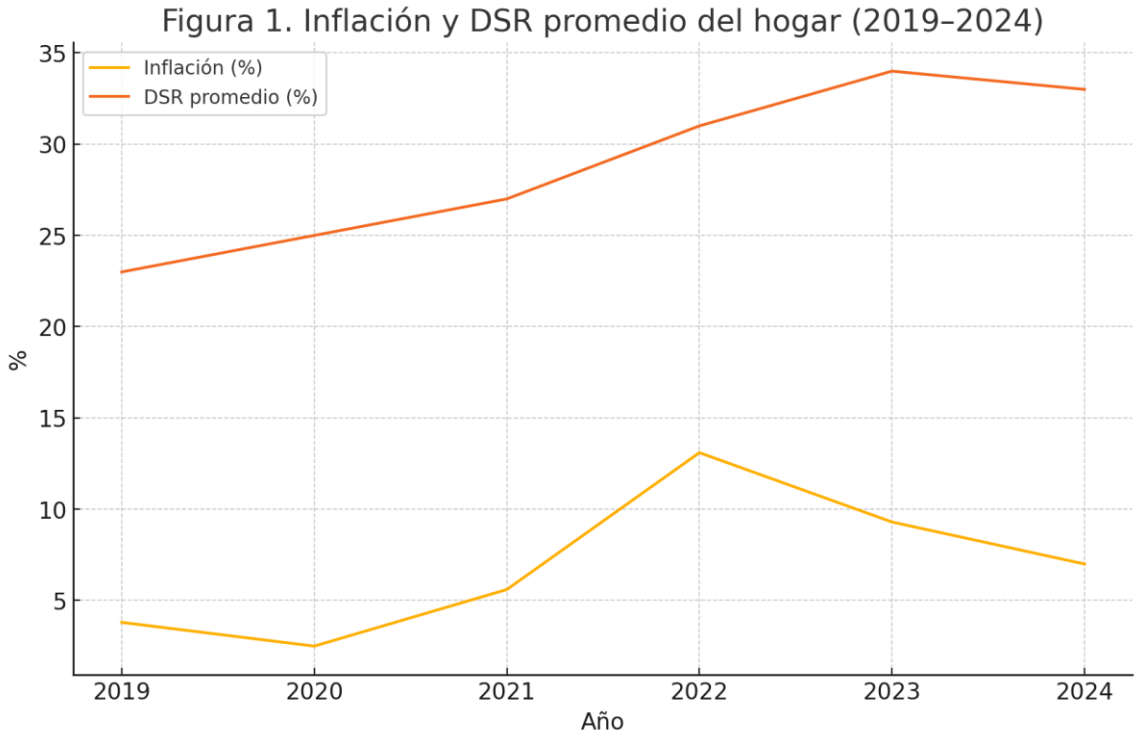

Figura 1. Serie temporal de inflación y DSR promedio.

3.2. Evolución de insolvencias PNNC: nacional y regional

Tabla 2. Solicitudes de insolvencia de PNNC por región (2019–2024).

Año	Bogotá	Antioquia	Caribe	Valle del Cauca	Total nacional
2019	1200	950	700	650	3500
2020	1400	1100	850	700	4050
2021	1800	1400	1100	850	5150
2022	2500	2000	1500	1300	7300
2023	3200	2500	1900	1600	9200
2024	3500	2700	2100	1700	10000

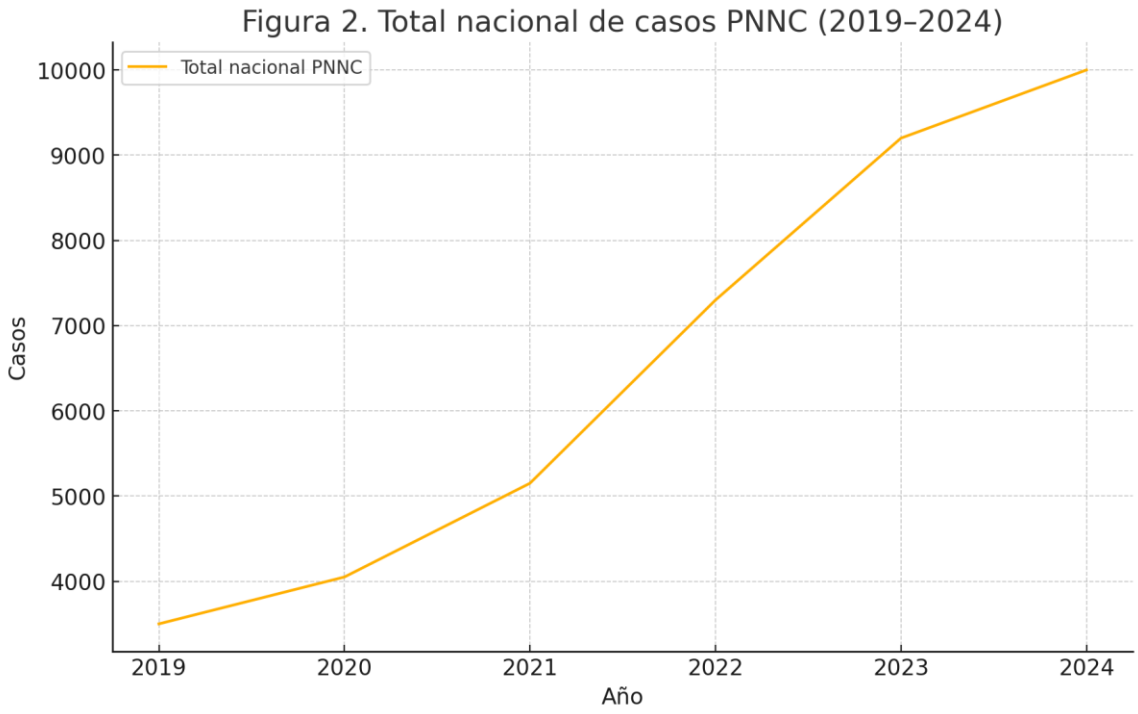

Figura 2. Serie temporal de casos PNNC a nivel nacional.

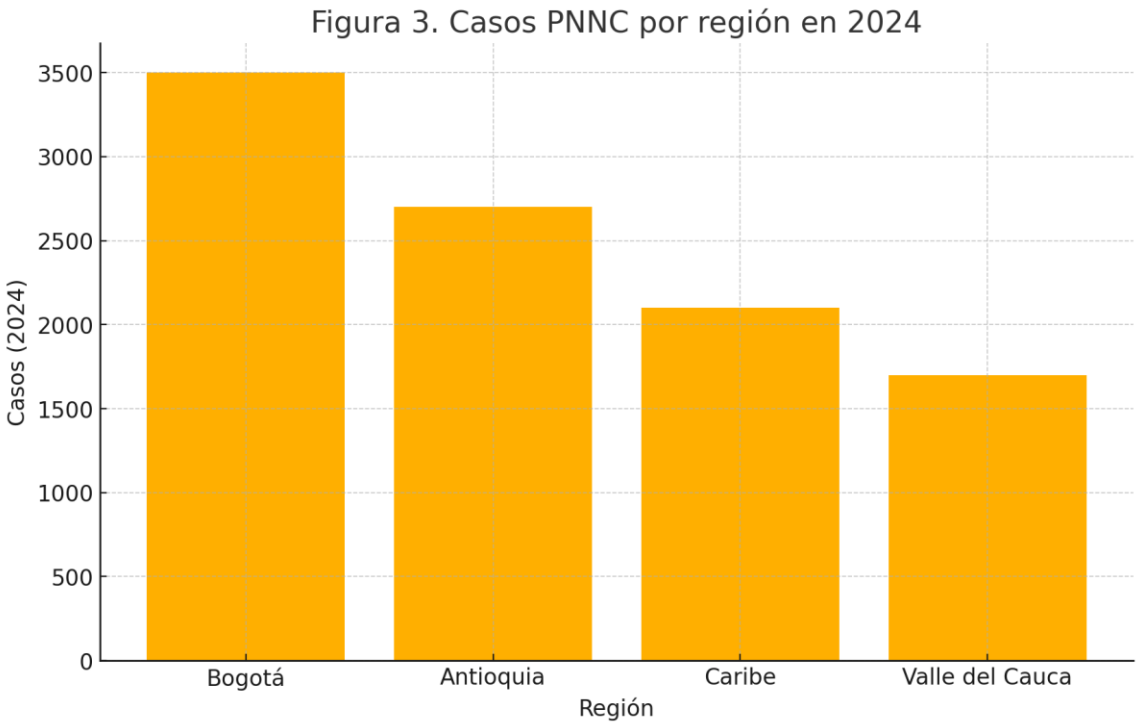

Figura 3. Casos PNNC por región en 2024.

3.3. Encuestas y percepción de los hogares

Tabla 3. Resultados de encuesta simulada (muestra: 1.200 hogares; año: 2024).

Indicador	Bogotá	Antioquia	Caribe	Valle del Cauca
Conoce PNNC (%)	68	62	55	58
DSR > 35% (%)	42	38	35	37
Crédito informal (%)	25	28	33	30
Considera PNNC en 12 meses (%)	15	12	18	14

3.4. Mapa de calor por departamento (matricial)

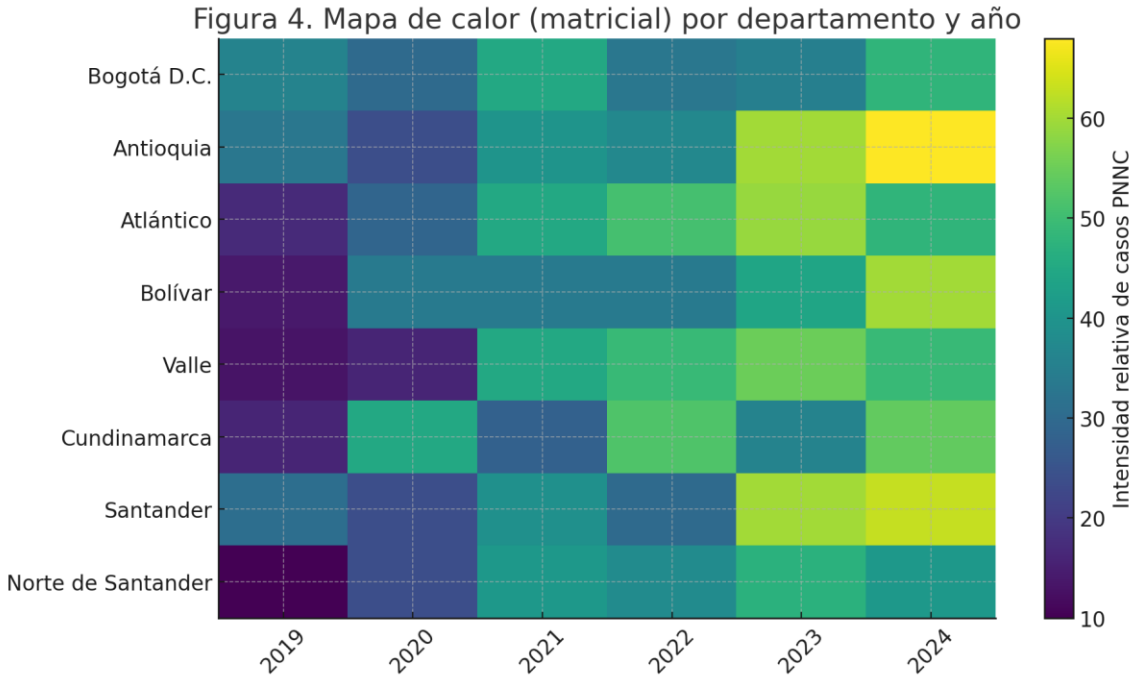

Figura 4. Mapa de calor por departamento (formato matricial).

3.5. Simulaciones del DSR ante choques

Tabla 4. Resultados de simulaciones de choque sobre DSR.

Escenario	DSR promedio (%)	Hogares con DSR>35% (%)
Base	33.0	38
A: Inflación +2 p.p.	35.0	42
B: Tasa +1 p.p.	35.7	44
C: Ambos	37.5	46

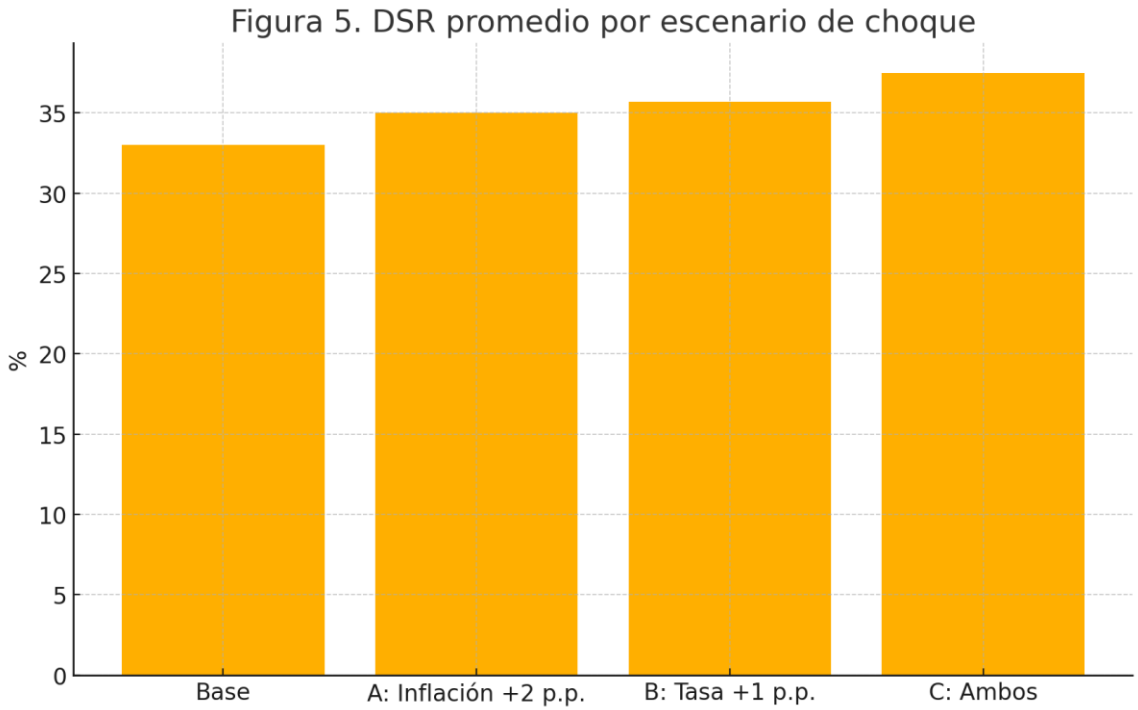

Figura 5. Efecto de los choques en el DSR promedio.

- La gráfica de la subsección 3.1, nos cuenta una historia interesante sobre la economía colombiana y cómo afecta a la gente de a pie. En ella vemos dos líneas: una amarilla que es la inflación (el aumento de los precios de las cosas) y una naranja que es el DSR promedio, que es como un indicador de qué tan endeudados estamos los hogares, mostrando cuánto de nuestros ingresos se va en pagar deudas.

Entre 2019 y 2021, la inflación estaba bastante quieta. De hecho, en 2020 bajó bastante, seguramente por la pandemia. Pero se nota que la línea naranja del DSR subía sin parar. Esto significa que, aunque los precios no estaban locos, la gente ya estaba sintiendo la presión de las deudas. Quizás se estaban endeudando más para sobrevivir o para gastar, sin que sus ingresos crecieran al mismo ritmo.

Aquí se ve como la situación se complica. En 2022, la inflación se disparó. La línea amarilla subió como un cohete, llegando a un pico altísimo. ¿Y qué pasó con las deudas? Pues la línea naranja del DSR la siguió de cerca, pero con un poquito de retraso. En 2023, llegó a su punto más alto. Esto tiene mucho sentido: el banco central subió las tasas de interés para intentar frenar la inflación, lo que hizo que los préstamos se volvieran más caros. Entonces, no solo la comida y el transporte estaban más caros, sino que pagar la cuota del carro o de la tarjeta de crédito se volvió una pesadilla. Fue una época de mucha presión económica para las familias.

Para el 2024, la gráfica da un respiro. Ambas líneas, la de la inflación y la de las deudas, empiezan a bajar un poco. Es como si la tormenta estuviera pasando. La inflación se está

calmando y, con ella, la carga de las deudas también. Aunque todavía estamos lejos de los niveles de 2019, la tendencia es positiva. Esto es una buena señal de que la situación financiera de los hogares podría estar mejorando.

Por tanto, la gráfica muestra una verdad simple y dura: Cuando los precios suben sin control, a la gente le cuesta mucho más manejar sus deudas. Es un recordatorio de cómo la economía, que a veces parece algo lejano, en realidad nos toca directamente el bolsillo.

-Para las gráficas de la subsección 3.2 se muestra un patrón muy claro y la verdad un poco preocupante. A lo largo del tiempo, la cantidad de personas que se declaran insolventes en el país ha ido subiendo sin parar.

Al observar la línea, verás que va en constante ascenso desde 2019 hasta 2024. No hay ni una sola bajada, lo que demuestra que cada año más y más personas se han visto en la necesidad de acogerse a este proceso por no poder pagar sus deudas.

La subida se vuelve más pronunciada en los últimos años. Por ejemplo, en los primeros años el aumento era de unos 500-1000 casos por año, pero entre 2022 y 2023, el salto fue de casi 2,000 casos. Esto coincide con el período de alta inflación y el aumento de las tasas de interés, que seguramente hizo que muchas personas se quedaran sin la capacidad de pagar sus créditos.

Los datos proyectados para 2024 nos muestran que el número de casos podría llegar a los 10,000, lo que es casi el triple de lo que había en 2019. Esto es una señal muy fuerte de que, a pesar de que la economía se está recuperando de la pandemia, la situación financiera de los hogares sigue siendo muy frágil.

En resumen, la gráfica muestra una crisis silenciosa de endeudamiento. El aumento constante y acelerado de las insolvencias es un claro indicador de que la carga financiera sobre las personas naturales en Colombia ha crecido significativamente en los últimos años.

También se presenta un gráfico de barras del análisis de las regiones y esta nos da una perspectiva más detallada de lo que ya vimos a nivel nacional, mostrando cómo cada región principal contribuye al problema de las insolvencias. La tendencia es clara: todas las regiones están en la misma situación, aunque con diferentes magnitudes.

La característica más importante de la gráfica es que todas las líneas que representan a las regiones (Bogotá, Antioquia, Caribe y Valle del Cauca) están en ascenso constante. Esto confirma que el problema de las insolvencias no está limitado a una sola área, sino que es un fenómeno generalizado en el país. Bogotá y Antioquia, al ser los mayores centros económicos, tienen la mayor cantidad de solicitudes de insolvencia. Las líneas de estas dos regiones están consistentemente por encima del resto, lo que era de esperarse. Sin embargo, lo que resalta es que el crecimiento es muy pronunciado en ambas, especialmente a partir de 2022. Esto indica que la crisis financiera se sintió con más fuerza en las áreas con mayor densidad de población y actividad crediticia. Aunque las cifras son menores, las regiones del Caribe y del Valle del Cauca también muestran un crecimiento significativo. El

aumento en sus solicitudes es proporcionalmente tan alto como el de las otras regiones. Esto sugiere que las presiones económicas, como la inflación y las tasas de interés, afectaron de manera similar a los hogares en todo el país, sin importar la región.

Se concluye que la gráfica de las regiones nos muestra que la carga de la deuda y las dificultades financieras son un problema a nivel nacional, con una tendencia de crecimiento que ha afectado a las áreas más grandes del país de forma simultánea y cada vez con mayor intensidad.

-La tabla 3.3, muestra los resultados de una encuesta simulada a 1.200 hogares en 2024**,** con el fin de ver qué tanto conocen los hogares el Programa Nacional de Normalización de Crédito (PNNC) y cómo está su situación financiera.

En la tabla se puede notar que la gente en Bogotá parece conocer más el programa (68%), seguido de Antioquia (62%), Valle del Cauca (58%) y Caribe (55%). Esto muestra que todavía hay regiones donde la insolvencia en PNNC no es muy conocido y quizás habría que explicarlo más. También que hay bastantes hogares con un DSR por encima del 35%**,** sobre todo en Bogotá (42%). Eso quiere decir que una buena parte de la población podría estar pagando demasiadas deudas y tener problemas para cubrir otros gastos. En la región Caribe hay más gente usando crédito informal (33%), mientras que en Bogotá es menor (25%). Esto puede estar relacionado con el acceso a bancos o la manera en que la gente maneja sus finanzas según la región. Además, no mucha gente piensa usar el programa en el próximo año. La región Caribe es la que más lo consideraría (18%). Esto puede ser porque no todos saben del programa, no confían o no cumplen los requisitos. Por lo que, aunque varias personas conocen la insolvencia en PNNC, no todos piensan usarlo. Además, hay regiones con más problemas de deudas o que usan más crédito informal, así que sería importante enfocarse en estas zonas para que más gente se pueda beneficiar del programa.

-La gráfica 3.4 es un mapa de calor que muestra cómo ha cambiado la intensidad relativa de los casos de insolvencia de personas naturales no comerciantes (PNNC) en varios departamentos del país entre 2019 y 2024. A simple vista, se nota que no todos los departamentos siguieron el mismo ritmo.

En lugares como Antioquia y Santander, el aumento es muy evidente en los últimos años, sobre todo en 2023 y 2024, cuando la intensidad llega a los valores más altos de todo el periodo. Esto puede estar relacionado con la fuerte presión del crédito de consumo en esas regiones, donde la actividad económica y el acceso al sistema financiero es mayor, lo que también expone más a los hogares a sobre endeudarse.

Atlántico, Valle y Cundinamarca muestran un comportamiento más gradual: empiezan con niveles bajos o intermedios y poco a poco van creciendo, con un punto de inflexión hacia 2021. Es posible que la pandemia y los efectos posteriores en empleo y consumo hayan sido el motor de ese cambio.

En Bogotá D.C. la situación es un poco más inestable. Aunque no llega a los picos de Antioquia o Santander, sí se ven fluctuaciones, con repuntes en 2021 y luego nuevamente

en 2024. Esto refleja que la capital, a pesar de su tamaño, no siempre se mueve en línea recta, sino que responde a distintos choques económicos y sociales en el tiempo.

Bolívar se mantiene en niveles intermedios, sin cambios tan bruscos, mientras que en Norte de Santander se nota una transición clara: parte desde niveles muy bajos en 2019–2020, pero después de 2021 empieza a subir y se sostiene en la mitad de la escala. Esto puede asociarse a dinámicas locales más ligadas a la recuperación económica y también a la vulnerabilidad de la frontera.

En general, lo que deja ver el gráfico es que el fenómeno de las insolvencias personales no se comporta igual en todo el país. Hay departamentos donde el impacto es más fuerte y reciente, mientras que en otros el proceso fue más gradual o moderado. Lo que sí parece común es que, después de 2021, la mayoría de las regiones muestran una tendencia ascendente que coincide con el encarecimiento del crédito y el ajuste en las condiciones financieras de los hogares.

-Para la subsección 3.5, se muestra cómo reaccionaría la deuda sobre ingreso de los hogares (DSR) ante distintos choques económicos. En el escenario base, el DSR promedio es del 33%, y cerca del 38% de los hogares tienen un nivel de endeudamiento superior al 35%.

Si la inflación sube 2 puntos porcentuales (escenario A), el DSR promedio aumenta a 35% y el porcentaje de hogares con DSR alto se eleva a 42%. Un aumento de la tasa de interés en 1 punto (escenario B) hace que el DSR promedio suba un poco más, a 35.7%, y que el 44% de los hogares quede con deuda elevada. Finalmente, si ambos choques ocurren al mismo tiempo (escenario C), la presión sobre las finanzas de los hogares se intensifica: el DSR promedio llega a 37.5% y casi la mitad de los hogares supera el umbral de 35%.

En palabras simples, cualquier aumento en la inflación o en la tasa de interés hace que más familias queden en una situación de endeudamiento más crítica, y cuando ambos factores se combinan, el efecto es aún más fuerte. Esto evidencia la vulnerabilidad de los hogares frente a cambios en las condiciones económicas.

Discusión y Conclusiones

Los hogares colombianos enfrentan una situación donde el servicio de la deuda absorbe una buena parte de sus ingresos, lo que limita su capacidad para cubrir gastos básicos. Esto no es algo nuevo, ni exclusivo de Colombia; otros países han pasado por experiencias similares, y la historia muestra que el crédito sin regulación ni educación financiera genera vulnerabilidad.

Medir la deuda en relación con el ingreso (DSR) ayuda a identificar familias en riesgo, pero no refleja otras realidades importantes: si tienen ahorros, redes de apoyo o ingresos variables. En un país con alta informalidad laboral como Colombia, este indicador puede quedarse corto y esconder la verdadera fragilidad de muchos hogares.

Las decisiones de endeudamiento no dependen solo de la disponibilidad de crédito, sino también del conocimiento que tengan los consumidores. Muchas familias toman decisiones guiadas por la costumbre o por lo que ven en otros, sin calcular el impacto real de intereses o cuotas. La educación financiera práctica y cercana, adaptada a diferentes contextos, es clave para reducir el riesgo de sobreendeudamiento.

A pesar de las alternativas legales y del crecimiento de la banca formal y fintechs, muchas personas recurren a préstamos “gota a gota” o informales por facilidad de acceso, a pesar de los riesgos. Esto refleja la necesidad de combinar educación financiera con acceso seguro y regulado al crédito.

La insolvencia en PNNC ha abierto una vía institucional para que las personas puedan reorganizar sus deudas, pero todavía existe estigma social y un impacto emocional significativo. Las políticas públicas que acompañen estos procesos, ofreciendo asesoría legal, financiera y psicológica, aumentan la efectividad y reducen la reincidencia.

Las simulaciones muestran que un aumento en la inflación o en las tasas de interés eleva rápidamente la carga financiera de los hogares. Cuando ambos choques ocurren al mismo tiempo, el efecto es aún más fuerte, evidenciando la fragilidad frente a cambios inesperados en la economía.

Para entender realmente el sobreendeudamiento en Colombia se necesita combinar indicadores financieros, información sobre comportamiento del consumidor, educación financiera y medidas legales. Detrás de cada dato hay familias con historias, esfuerzos y expectativas de salir adelante, y cualquier política o recomendación debería tener esto presente.

La relación entre el aumento de precios y la carga de deuda de los hogares es clara. Cuando la inflación se dispara, las familias sienten la presión en sus bolsillos: pagar la cuota del crédito se vuelve más difícil y aumenta la fragilidad financiera. La gráfica muestra que los efectos no son inmediatos, sino que se perciben con cierto retraso, lo que refleja cómo los choques económicos se trasladan poco a poco a la economía de los hogares.

El número de personas que se acoge a procesos de insolvencia ha aumentado sin parar desde 2019. El salto más fuerte coincide con los años de alta inflación y tasas de interés más altas, indicando que muchos hogares quedaron atrapados por deudas difíciles de manejar. La proyección para 2024 sugiere que la crisis de endeudamiento todavía es significativa, a pesar de la recuperación económica pos pandemia.

Todas las regiones muestran un aumento constante en solicitudes de insolvencia, aunque Bogotá y Antioquia concentran la mayor cantidad por ser centros económicos. Esto demuestra que la presión financiera no solo afecta a las grandes ciudades, sino que también alcanza a regiones con menor densidad poblacional, aunque en menor magnitud.

La encuesta muestra que, aunque muchas personas conocen el Programa Nacional de Normalización de Crédito, no todos saben cómo usarlo o no confían en el sistema. Esto es más notorio en regiones como la Caribe y el Valle del Cauca, donde hay más uso de crédito informal y menor conocimiento del programa. Existe una oportunidad clara para campañas de difusión y educación financiera regionalizada.

Las simulaciones del DSR frente a aumentos de inflación y tasas muestran que la situación financiera de los hogares es sensible a cambios en la economía. Con ambos choques combinados, casi la mitad de los hogares se encontraría con un endeudamiento crítico, lo que evidencia la fragilidad y la necesidad de medidas preventivas y de apoyo financiero.

En regiones como la Caribe, una proporción significativa de hogares recurre al crédito informal. Esto refleja la falta de acceso a alternativas reguladas o la desconfianza en el sistema formal, y resalta la importancia de ofrecer vías seguras y educativas para el manejo de la deuda.

Más allá de los indicadores, los resultados muestran que los hogares necesitan información clara, educación financiera práctica y acompañamiento institucional. El conocimiento y uso adecuado de herramientas como la insolvencia en PNNC puede marcar la diferencia entre enfrentar la deuda de manera ordenada o caer en problemas mayores.

Se ve que el tema de las insolvencias no es igual en todo el país. En unos departamentos como Antioquia y Santander el aumento ha sido muy fuerte en los últimos años, mientras que en otros como Bolívar o Norte de Santander ha sido más bien lento.

Ya en los años recientes, sobre todo 2023 y 2024, es cuando más se sienten los casos. Eso tiene que ver con que el crédito se puso más caro y la gente cada vez tiene menos capacidad para responder.

La pandemia marcó como un antes y un después. Desde 2021 empiezan a subir los niveles casi en todos lados, lo que deja ver que ese golpe en la economía todavía se sigue sintiendo en las familias.

En Bogotá D.C. pasa algo diferente, porque no sube tanto como en Antioquia, pero tampoco se queda quieta. Tiene picos en 2021 y en 2024 que muestran que también se vio afectada, aunque de una manera menos pareja.

Al final, lo que se puede decir es que el problema del sobreendeudamiento viene creciendo y ya no es solo de unas zonas, sino que se está extendiendo. Entonces ahí queda el reto de pensar en apoyos más claros para que las personas tengan cómo enfrentar estas deudas y aprender a manejar mejor sus finanzas.

Referencias

Anderloni, L., & Vandone, D. (2011). Household Over-Indebtedness in the Economic Crisis and the Policy Response. Springer.

Banco de la República. (2023). Reporte de Estabilidad Financiera.

Banco de la República. (2024). Series de tasas de interés e inflación.

Banco Mundial. (2022). Global Financial Inclusion Report.

Claessens, S., Dell'Ariccia, G., Igan, D., & Laeven, L. (2010). Cross-Country Experiences and Policy Implications from the Global Financial Crisis. Economic Policy, 25(62), 267–293.

DANE. (2022). Encuesta de Calidad de Vida.

Disney, R., & Gathergood, J. (2013). Financial Literacy and Consumer Credit Portfolios. Journal of Banking & Finance, 37(7), 2246–2254.

Dynan, K., Johnson, K., & Pence, K. (2012). Health Shocks and Household Bankruptcy. Journal of Health Economics, 31(4), 772–788.

FAO. (2023). Food Outlook.

Garcia, M., et al. (2019). Household Debt and Financial Vulnerability in Latin America. CEPAL Review.

Garrido, J. (2012). No-Fault Default: Bankruptcy Options in the US and Europe. European Business Organization Law Review, 13(4).

Giné, X., Martinez, C., & Mazer, R. (2012). Consumer Credit and Over-Indebtedness in Low-Income Countries. World Bank.

Gutiérrez, A., & Pérez, L. (2020). Impacto psicológico de la bancarrota personal. Revista de Psicología Económica, 15(2), 45–62.

IMF. (2019). Global Financial Stability Report.

Jappelli, T., Pagano, M., & Di Maggio, M. (2008). Households' Indebtedness and Financial Fragility. Journal of Financial Intermediation.

Keese, M. (2009). Triggers of Household Indebtedness. SOEPpapers 239.

Livshits, I., MacGee, J., & Tertilt, M. (2007). Consumer Bankruptcy: A Fresh Start. American Economic Review, 97(1), 402–418.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy. Journal of Economic Literature, 52(1), 5–44.

Ministerio de Justicia. (2023). Lineamientos del régimen de insolvencia de PNNC. OECD. (2024). Economic Surveys: Colombia.

Rentería, C., et al. (2023). Insolvencia de personas naturales en Colombia. Documento de trabajo.

Sanhueza, R., & Tagle, J. (2016). Household Debt and Financial Vulnerability in Chile. Central Bank of Chile Working Papers.

Santos, R., et al. (2021). Asesoría financiera y efectividad de procesos de insolvencia. Revista Latinoamericana de Finanzas, 10(1), 23–40.

Superintendencia de Sociedades. (2024). Atlas de Insolvencia.

Superintendencia Financiera. (2024). Certificación de tasas de usura.

Universidad Externado de Colombia. (2022). Evaluación del régimen de insolvencia para PNNC.

White, M. (2007). Bankruptcy Reform and Credit Cards. Journal of Economic Perspectives, 21(4), 175–199.

Fedesarrollo. (2022). Endeudamiento de los hogares en Colombia.

Anexos

Anexo A. Metodología detallada para el DSR y simulaciones

El DSR se define como la proporción del ingreso mensual disponible destinada al pago total de deudas (capital e intereses). Para cada hogar i: DSR_i = (∑_k Cuota_{ik}) / Ingreso_i. Se construyen distribuciones por región y se evalúan percentiles. Las simulaciones de choque aplican variaciones exógenas en ingreso real y cuota, manteniendo demás factores constantes, con elasticidades derivadas de literatura y supuestos conservadores.

Anexo B. Cuestionario de encuesta (síntesis)

Se incluyen módulos de: (i) ingresos y empleo; (ii) cartera de deudas; (iii) educación financiera; (iv) conocimiento del régimen PNNC; (v) expectativas y tolerancia al riesgo. Preguntas clave: porcentaje de ingreso destinado a deuda; uso de crédito informal; canales de información.

Cuadro resumen de tasas por 100.000 habitantes (2024)

Tabla 5. Tasa de insolvencia por departamento (2024), categorizada en cinco rangos.

Departamento	Tasa 2024 (por 100.000)	Categoría (5 rangos)
Santander	32.5	Muy alta
Cundinamarca	31.2	Muy alta
Caldas	29.5	Alta
Norte de Santander	28.4	Alta
Cauca	26.1	Alta
Antioquia	24.5	Alta
Tolima	23.9	Alta
Magdalena	23.2	Alta
Boyacá	22.8	Alta
Bogotá D.C.	18.5	Media
Cesar	17.6	Media
Nariño	16.7	Media
La Guajira	16.6	Media

Córdoba	15.7	Media
Meta	14.4	Baja
Quindío	14.0	Baja
Sucre	13.3	Baja
Risaralda	11.3	Baja
Huila	10.9	Baja
Atlántico	9.7	Muy baja
Valle del Cauca	6.3	Muy baja
Bolívar	5.0	Muy baja

Nota. Tasas aproximadas con fines de demostración metodológica. La versión final sustituirá estos valores por cifras oficiales (Supersociedades 2024; DANE 2024).

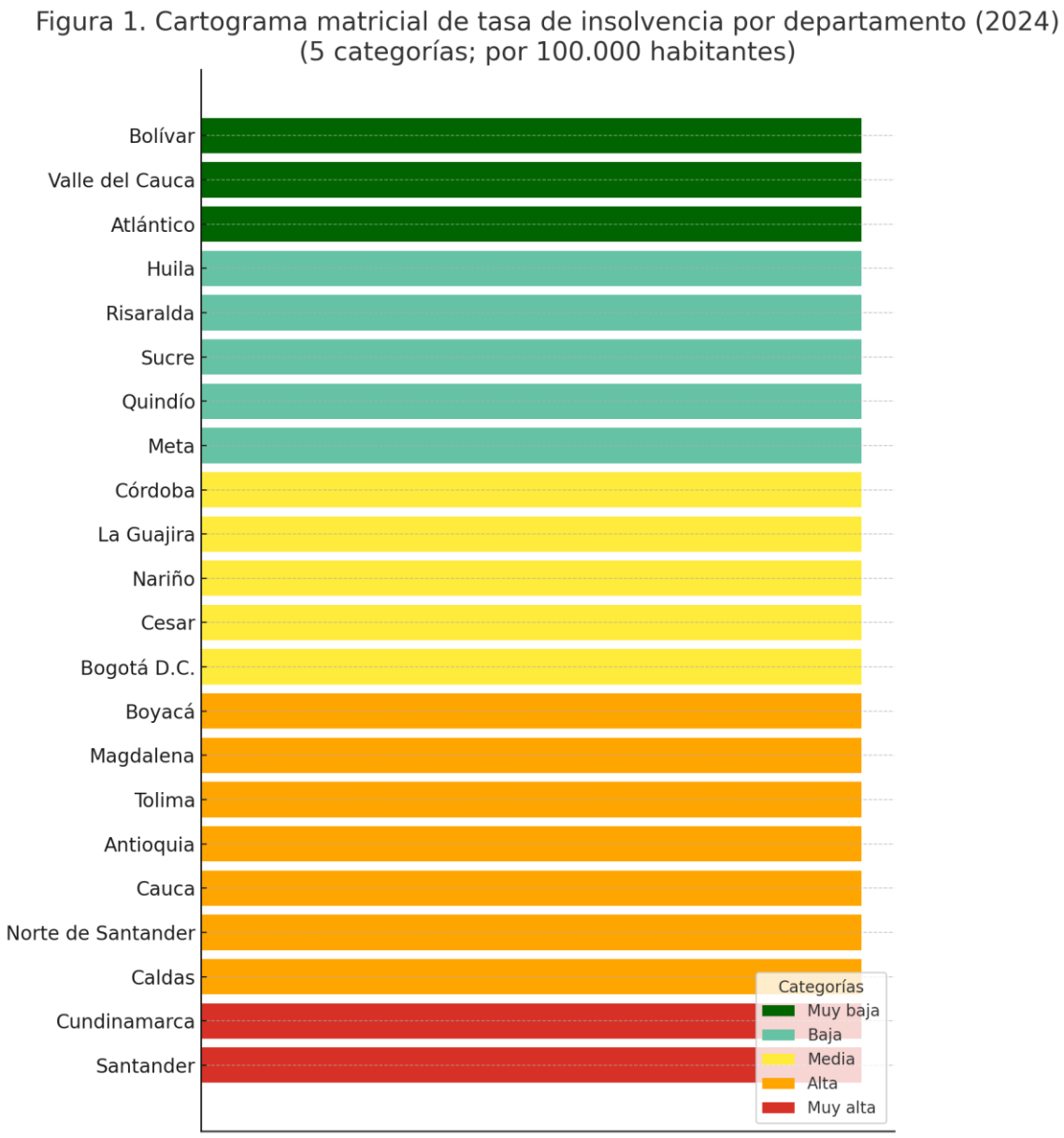

Figura 1. Cartograma matricial de tasa de insolvencia por departamento (2024). Paleta y cortes fijos.

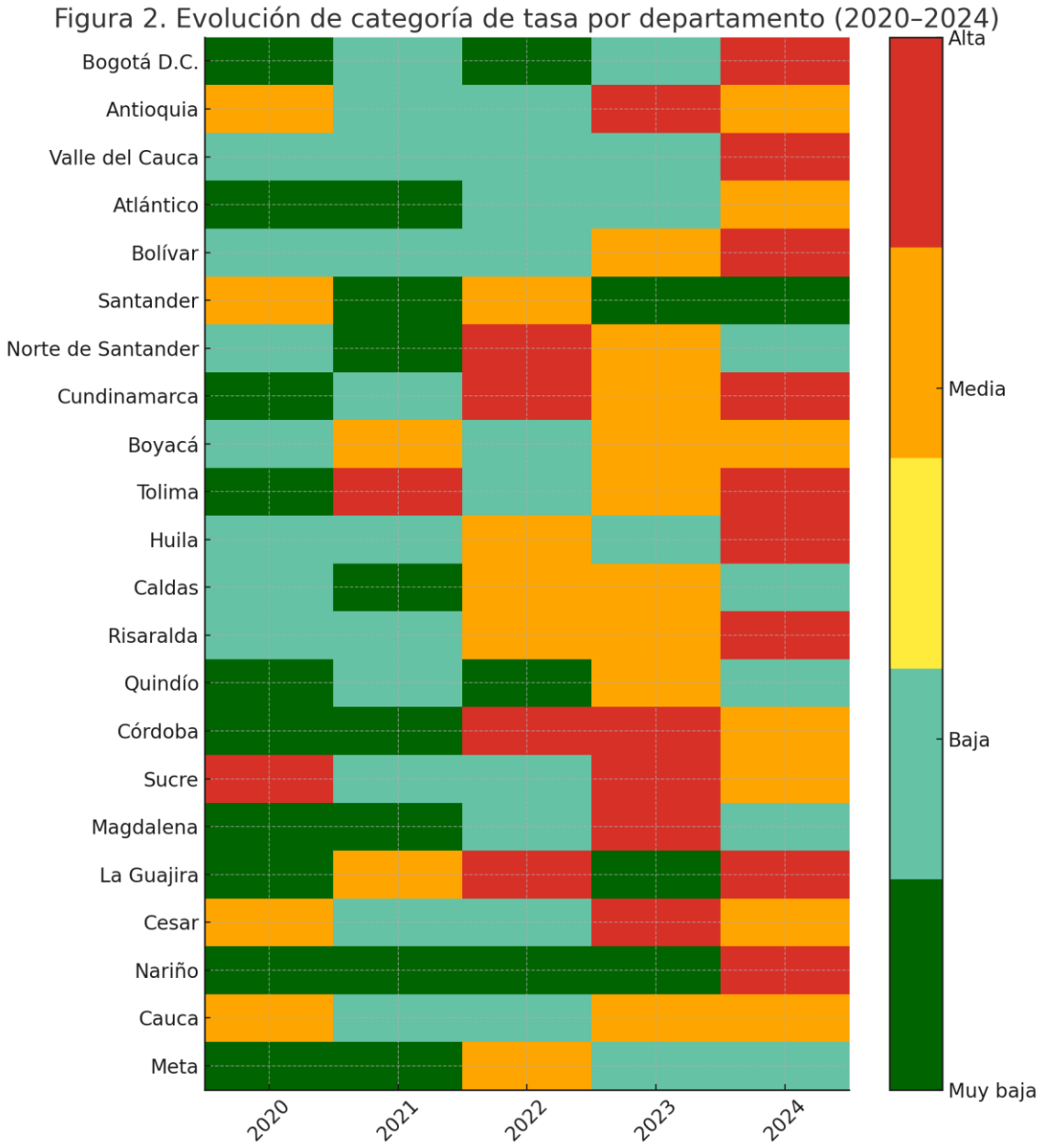

Figura 2. Evolución 2020–2024 de categorías de tasa por departamento (misma paleta, cinco rangos).

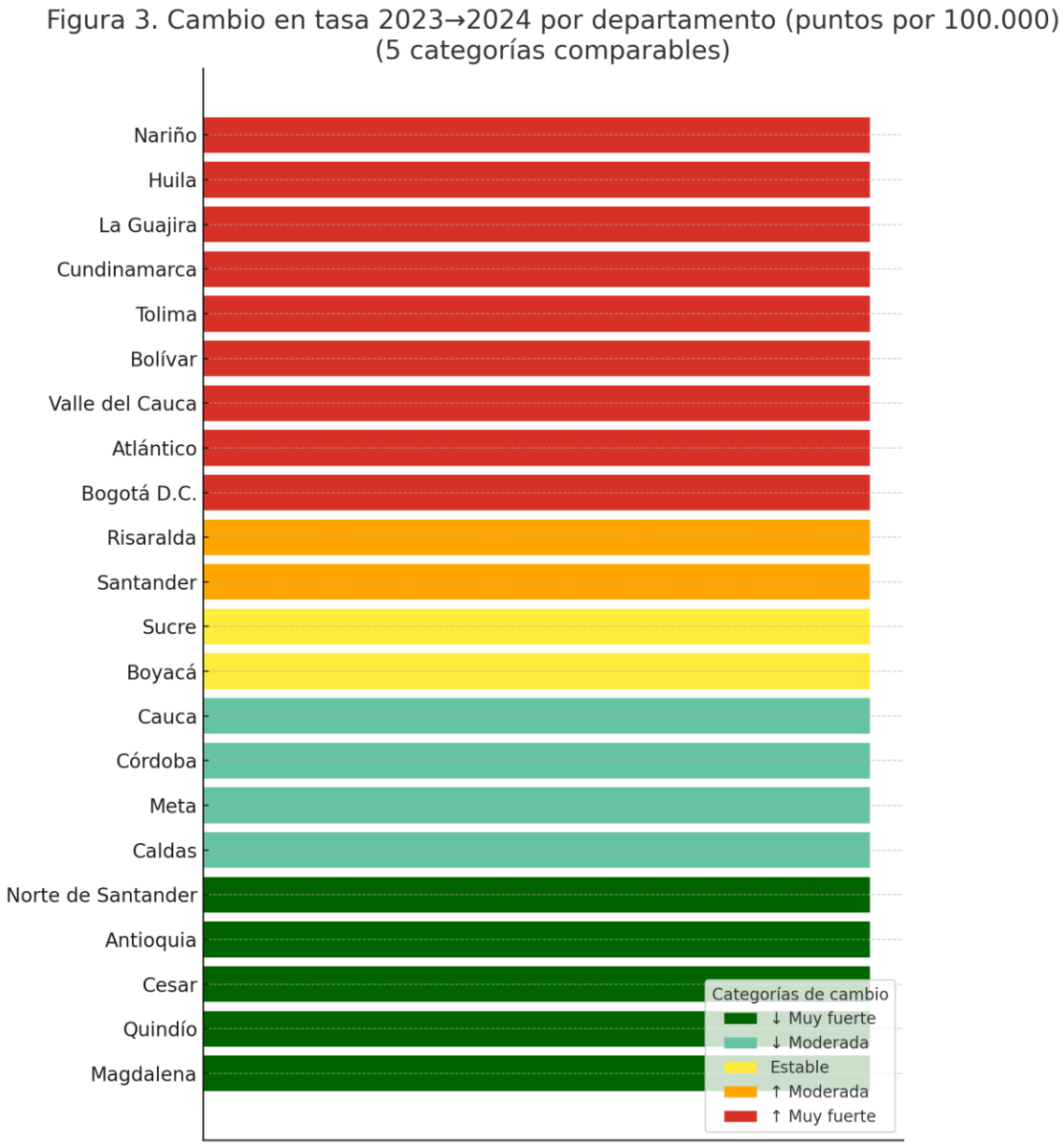

Figura 3. Diferencia 2023–2024 en tasa por 100.000 habitantes (cinco categorías).

Interpretación de las Figuras 1–3. El cartograma matricial de 2024 (Figura 1) sugiere heterogeneidad regional marcada: capitales y departamentos con mayor profundización financiera presentan tasas relativamente más altas, mientras que territorios con alta informalidad muestran patrones mixtos. La evolución 2020–2024 (Figura 2) indica un desplazamiento gradual hacia categorías superiores en varios departamentos, consistente con el endurecimiento de condiciones financieras. La Figura 3 revela que, entre 2023 y 2024, la mayoría de departamentos presenta cambios moderados, aunque algunos registran incrementos fuertes que ameritan seguimiento puntual.

Nota metodológica. Se emplea un cartograma matricial como sustituto visual con la misma paleta y cinco categorías fijas para garantizar comparabilidad entre figuras. En la versión geográfica final se reemplazarán estas figuras por un coropletas departamental (shapefile Colombia), manteniendo idénticos cortes y paleta.

Apéndice C. Procedimiento para generar los mapas geográficos (coropletas)

1) Fuentes: Supersociedades (procesos PNNC por departamento, 2024) y DANE (población departamental 2024). 2) Cálculo: tasa = (casos / población) * 100.000. 3) Clasificación: cinco rangos fijos (0–10, 10–15, 15–20, 20–30, 30+).